



Proceso	Ejecutivo a continuación
Demandante	Elkin de Jesús Bustamante Pino
Demandados	Carlos Andrés Marín Arango y otro
Radicado	No. 05001-31-03-007-2019-00059-02
Procedencia	Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín
Instancia	Segunda
Ponente	Luís Enrique Gil Marín
Asunto	Sentencia No. 037
Decisión	Confirma
Tema	Ejecutivo a continuación
Subtemas	Sentencia Anticipada. Prescripción. Interrupción de la prescripción.

**TRIBUNAL SUPERIOR**

**SALA SEGUNDA DE DECISION CIVIL**

Medellín (Ant.), once de noviembre de dos mil veintiuno

**I. OBJETO**

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el codemandado Gustavo Adolfo Rendón Rodas, en contra de la sentencia anticipada proferida por el **JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN**, en el proceso ejecutivo conexo a continuación de declarativo,

instaurado por el señor **ELKIN DE JESÚS BUSTAMANTE PINO**, contra los señores **CARLOS ANDRÉS MARÍN ARANGO y GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS**.

## **II. ANTECEDENTES**

**Pretensiones:** Solicita el demandante se libre mandamiento ejecutivo a su favor y a cargo de los demandados, por las sumas a que fueron condenados y por las costas procesales a saber: a) \$14.263.644.00 lucro cesante consolidado; b) \$24.319.549.00 lucro cesante futuro; c) \$33.124.640.00 que equivalen a 40 SMLMV; d) \$15.000.000.00 costas primera instancia y, e) \$800.000.00 costas segunda instancia; más intereses de mora a la tasa legal del 0.5% mensual desde que se hicieron exigibles cada una de las obligaciones hasta el pago total de las mismas.

**Elementos fácticos:** Conforme a lo ordenado en el art. 306 del C. General del Proceso, solicita la ejecución de la sentencia proferida en el proceso ordinario promovido por el señor Elkin de Jesús Bustamante Pino, contra los señores Gustavo Rendón Rodas y Carlos Andrés Marín Arango, radicado No. 2009-00363.

**Mandamiento de pago:** Se libró por auto del 04 de febrero de 2019 (folio 4 cuaderno principal); el codemandado Carlos Andrés Marín Arango, se notificó personalmente el 30 de julio de dicha anualidad (folio 6 cuaderno principal) y no emitió pronunciamiento alguno; por su parte, el ejecutado Gustavo Adolfo Rendón Rodas, se notificó el 02 de agosto de 2019

(folio 7 cuaderno principal), quien replicó la demanda, se opuso a las pretensiones y propuso como medios de defensa: **i) prescripción y, ii) inexistencia de la obligación.**

**SENTENCIA ANTICIPADA:** Se profirió el 18 de diciembre de 2019, con la siguiente resolución:

**"PRIMERO:** DESESTIMAR las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva.

**"SEGUNDO:** SEGUIR adelante la ejecución en favor de la (sic) ELKIN DE JESÚS BUSTAMANTE PINO, en contra de CARLOS ANDRÉS ARANGO y GUSTAVO RENDÓN RODAS, por las sumas y conceptos indicados en el mandamiento de pago del 4 de febrero de 2019 (cfr. fl. 4), advirtiéndole que los intereses moratorios se liquidarán así: el lucro cesante consolidado y futuro, y los perjuicios morales desde el 29 de mayo de 2014; las agencias en derecho de primera instancia desde el 9 de octubre de 2014, y las agencias en derecho de segunda instancia a partir del 14 de julio de 2019, inclusive.

**"TERCERO:** Condenar en costas a los demandados. Para ser incluidas en la liquidación, se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.965.700. Líquidense en su debida oportunidad, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P.

**"CUARTO:** Ordenar el remate de los bienes embargados y secuestrados, previo avalúo, para que con su producto se

*pague a la demandante el valor de la obligación y las costas, así como la liquidación del crédito presentada por las partes.*

**"QUINTO:** *Ordenar la remisión del presente expediente a los Juzgados de Ejecución Civil para el trámite subsiguiente".*

Como soporte para esta decisión, indica que para verificar los presupuestos de la prescripción, se debe comenzar por identificar los títulos base del recaudo; al efecto, observa que las obligaciones demandadas consisten en el pago de las condenas por lucro cesante consolidado y futuro, perjuicios morales que tienen fundamento en las sentencias del 06 de junio de 2013 y 08 de mayo de 2014, cuya firmeza y exigibilidad se concretan, el 29 de mayo de 2014, día posterior a la desfijación del edicto de la sentencia de segundo grado, como lo ordenan los artículos 302 y 305 del Código General del Proceso y, las agencias en derecho, que tienen como fundamento los autos del 01 de octubre y 04 de julio de 2014, respectivamente, quedando en firme las costas de primer grado el 09 de octubre de 2014, y las de instancia superior el 14 de julio adiado; fechas a partir de las cuales se computa el término de cinco (5) años consagrado en el art. 2536 del C. Civil; de donde los plazos para exigir las prestaciones que el acreedor reclama, culminarían el 29 de mayo, 14 de julio y 09 de octubre de 2019, respectivamente; adicional a lo anterior, brota con claridad, que las prescripciones de las obligaciones objeto de recaudo, fueron interrumpidas el 21 de enero de 2019, con la solicitud de ejecución presentada por el ejecutante, pues habiendo transcurrido menos de un año entre la providencia de

apremio y la notificación al accionado, es la fecha de presentación de la demanda y no la de notificación al ejecutado, la determinante para establecer la interrupción de la prescripción o la inoperancia de la misma; por tanto, la prescripción alegada fue oportunamente interrumpida.

Frente a la excepción de "*inexistencia de la obligación*", basta con indicar que el numeral 2º del art. 442 del C. General del Proceso, señala que contra las obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por autoridad jurisdiccional, solo proceden las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, no siendo posible soslayar los efectos de cosa juzgada en la instancia ejecutiva. Por estas razones, se desestimarán los medios de defensa propuestos.

**Apelación:** Lo interpuso el codemandado Gustavo Adolfo Rendón Rodas, indicando como reparos: En este caso, no se configura la hipótesis prevista en el art. 278-2 del C. General del Proceso, que establece que se dictará sentencia anticipada cuando no hubieren pruebas para decretar y en el presente asunto, oportunamente solicitó la práctica de pruebas con las excepciones propuestas; cuyo decreto y práctica está en suspenso en virtud del recurso de apelación interpuesto y concedido ante el superior, contra el auto que negó decretarlas; pues en caso de que la decisión de primer grado sea revocada quedaría sin piso esa parte de la sentencia; la forma como el a quo computó el término prescriptivo es errónea, pues tratándose de una ejecución de una providencia judicial, regulada por el art. 305 del C.

General del Proceso, el término para instaurar la correspondiente acción es de cinco (5) años; la providencia base de recaudo se profirió el 06 de junio de 2013, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Descongestión de Medellín y la notificó por edicto el 17 de junio de 2013, desfijado el 19 de los mismos y ejecutoriada tres (3) días después de su desfijación; contra la decisión se interpuso el recurso de alzada, el cual fue desatado mediante sentencia del 15 de julio de 2014 y la solicitud de ejecución con base en dicho fallo fue presentada el 21 de enero de 2019, el mandamiento de pago se libró el 04 de febrero adiado; se notificó al codemandado Gustavo Adolfo Rendón Rodas, el 02 de agosto de dicha anualidad, lo que debió hacer antes del 15 de julio de 2019; por lo que el fenómeno de la prescripción sí operó (folios 35 a 37 cuaderno principal).

No obstante que el recurrente no describió el traslado concedido; advierte la Sala que al interponer el recurso de apelación y señalar los puntos concretos de inconformidad, lo sustentó como viene de sintetizarse, sin que sea necesario exigir sustentación en segunda instancia porque la sentencia se proferirá por escrito.

Sobre el particular, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, se pronunció en sentencia de tutela STC5497-2021, Rdo. 11001-02-03-000-2021-01132-00 del 18 de mayo de 2021. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo, precisando:

*"4.2. Así las cosas, la Sala ha considerado que en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, la exposición de los motivos de la alzada frente a una sentencia judicial, no exime al recurrente de la carga de sustentar oralmente sus inconformidades ante el superior. Y es que, ello se justifica porque el sistema procesal contemplado en aquella obra propende por el respeto y la garantía del principio de oralidad, así como de otros valores importantes como la celeridad y la concentración de los actos judiciales.*

*"4.3. Sin embargo, la difícil situación por la que atraviesa actualmente la sociedad a causa de la pandemia generada por el covid-19, obligó a que el Estado se adaptara a los retos impuestos por la propagación de éste. Así por ejemplo, en el campo jurídico, se promulgaron varias normas de carácter transitorio sobre la ritualidad de los procesos judiciales, de esta manera, respecto de la sustentación del recurso de apelación, el artículo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, dispuso que:*

*"«El recurso de apelación contra sentencia en los procesos civiles y de familia, se tramitará así:*

*"Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del término de ejecutoria del auto que admite la apelación, las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará únicamente en los casos señalado en el artículo 327 del Código General del Proceso. El juez se pronunciará dentro de los cinco (5) días siguientes.*

"Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. Vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita que se notificará por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto».

"4.4. De este modo, cierto es que el cambio de la realidad que trajo la emergencia sanitaria conllevó a que se abandonara, momentáneamente, la necesidad de sustentar oralmente el recurso de apelación, para ser suplida por el sistema de antaño, esto es, que las inconformidades de los apelantes contra las providencias judiciales se formularan por escrito y así proteger bienes tan trascendentales como la vida y la salud de los usuarios y funcionarios de la justicia.

"No obstante, aquí es pertinente hacer claridad en algo, y es que la exigencia de exponer de manera oral los reproches frente a los pronunciamientos judiciales no ha desaparecido, pues, se reitera, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional son temporales debido a la emergencia sanitaria, además, por motivos de salubridad pública, la oralidad actualmente no es indispensable, por eso es que, por ahora los recurrentes deben presentar sus disensos de manera escrita.

"4.5. Bajo esa perspectiva, en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, si desde el umbral de la



*interposición de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que está en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentación de la impugnación, de lo contrario, si los reproches realizados apenas son enunciativos, desde luego, el juez deberá ordenar el agotamiento de esa formalidad, conforme lo previsto en la normatividad señalada...”*

Por su parte, el extremo activo dentro del traslado, adujo que la sentencia de primer grado no presenta ningún yerro como lo afirma el recurrente; el a quo rechazó las pruebas notoriamente improcedentes solicitadas por el demandado, decisión que fue apelada y el recurso se concedió en el efecto devolutivo, como lo manda el inciso 4º del numeral 3º del art. 323 del C.G.P.; además, el trámite del recurso no suspende el cumplimiento de la decisión recurrida ni el trámite del proceso, al tenor del numeral 2º de la citada norma; la prescripción formulada por el demandado no se configuró, pues este pretende desconocer lo previsto en los arts., 94 del C.G.P., y 2359 del C. Civil; todos los recursos interpuestos por el enjuiciado frente al decreto de pruebas, prescripción, demás excepciones, así como la solicitud de nulidad del proceso primigenio, han sido negados y confirmados por la Sala. Por estas razones, solicita se confirme la decisión de primer grado y se condene en costas al ejecutado.

### III. CONSIDERACIONES

**Problemas jurídicos:** El recurso de apelación de cara a la sentencia de primer grado plantea los siguientes problemas jurídicos que la Sala debe resolver: ¿Se podía proferir sentencia anticipada? ¿La excepción de prescripción está llamada a prosperar?

**Sentencia anticipada:** La sentencia anticipada está consagrada en el art. 278 del C. General del Proceso, al efecto, establece: *“Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias.*

*“Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás providencias.*

*“En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:*

*“1. Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.*

*“2. Cuando no hubiera pruebas por practicar.*

*"3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa".*

En primer lugar, el recurrente afirma que no era posible proferir sentencia anticipada porque según el numeral 2º del art. 278 del C. General del Proceso, solo se puede dictar sentencia anticipada cuando no hay pruebas para practicar y, en el presente caso, se encuentra en suspenso el decreto y practica de las pruebas, solicitadas al proponer las excepciones de fondo, porque contra el auto que negó su decreto interpuso el recurso de apelación ante el superior y en caso de que dicha decisión sea revocada, quedaría sin piso esa parte de la sentencia.

Al respecto, la Sala observa que contra el auto proferido el 18 de septiembre de 2019, que negó el decreto de la prueba testimonial y el interrogatorio de parte, solicitados por el codemandado Gustavo Adolfo Rendón Rodas (folio 22 cuaderno principal), éste interpuso el recurso de apelación, concedido el 25 de los mismos, en el efecto devolutivo (folio 26 cuaderno principal); de donde se sigue, que no se suspende el cumplimiento de la providencia apelada, ni el curso del proceso por mandato del numeral 2º del art. 323 del C. General del Proceso; a lo que se agrega, que este dispositivo en el inciso 9º, del numeral 3º establece: *"La circunstancia de no haberse resuelto por el superior recursos de apelación en el efecto devolutivo o diferido, no impedirá que se dicte sentencia. Si la que se profiera no fuere apelada, el secretario comunicara inmediatamente este hecho al*

*superior por cualquier medio, sin necesidad de auto que lo ordene, para que declare desiertos dichos recursos”;* bajo estas circunstancias, el hecho de haberse interpuesto y concedido el recurso de apelación en el efecto devolutivo, contra el auto que negó el decreto de la prueba oral solicitada y de no haber sido resuelto por el superior, no era óbice para que se dictara sentencia anticipada como lo pretende el recurrente y como acertadamente lo estimó el a quo; a lo que se suma, que el recurso que se interpuso contra el auto que negó las pruebas ya fue resuelto en segunda instancia, en proveído del 23 de junio de la pasada anualidad, confirmando la decisión de primer grado.

***La prescripción extintiva:*** Este medio de defensa, esta incluido en la lista de las excepciones que el numeral 2º del art. 442 del C. General del Proceso, autoriza oponer al demandante, cuando se trata de la ejecución de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional.

Ahora, como se trata de una acción ejecutiva el término prescriptivo a la luz del art. 2536 del Código Civil, es de cinco (5) años, contados a partir del día del vencimiento de la prestación, que para el presente caso tuvo lugar los días 29 de mayo, 04 de julio y 01 de octubre de 2014, como lo precisó el señor Juez a quo, lo que implica que el vencimiento del plazo prescriptivo tuvo lugar el 29 de mayo, 04 de julio y 01 de octubre de 2019, salvo que se presente el fenómeno de la interrupción o suspensión de la prescripción.

Sobre el particular, el art. 94 del C. General del Proceso, vigente para la fecha de presentación de la demanda, establece que: *“La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquélla o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado.”*

En el presente caso, la demanda se presentó el 21 de enero de 2019 (folio 2 cuaderno principal); el 04 de febrero adiado, se libró el mandamiento ejecutivo (folio 4 cuaderno principal) y, se notificó personalmente al codemandado Gustavo Adolfo Rendón Rodas el 02 de agosto de 2019 (folio 7 cuaderno principal), antes de que transcurriera el año, contado desde el seis (6) de febrero de 2019, fecha de notificación del auto de apremio al demandante, lo que permite colegir inequívocamente que la prescripción de las obligaciones pretendidas quedaron interrumpidas con la presentación de la demanda, el 21 de enero de ese mismo año, cuando aun no se había consumado la prescripción.

**Conclusión:** Como la prescripción no se había consumado para la fecha en que se presentó la demanda, se interrumpió como se precisó y la prescripción no se configuró, lo que impone confirmar la sentencia de primer grado.

Se condenará al codemandado Gustavo Adolfo Rendón Rodas, a pagar las costas de segunda instancia a favor del demandante. Como agencias en derecho causadas en segunda instancia se fijará la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS (\$1.817.052.00), que equivale a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (Acuerdo PSAA16-10554, del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura), que se liquidarán conjuntamente con las de primer grado.

#### **IV. RESOLUCIÓN:**

A mérito de lo expuesto, la **SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

#### **F A L L A:**

- 1.** Por lo dicho en la parte motiva se CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia indicadas.
- 2.** Se condena al codemandado Gustavo Adolfo Rendón Rodas, a pagar las costas de segunda instancia a favor del demandante. Como agencias en derecho causadas en segunda instancia se fija la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS (\$1.817.052.00), que equivalen a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (Acuerdo PSAA16-

10554, del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura), que se liquidarán conjuntamente con las de primer grado.

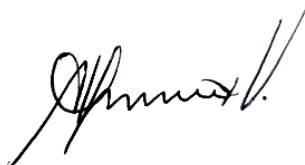
**3.** Devuélvase el expediente al lugar de origen.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUELVA**

**Los Magistrados**



**LUIS ENRIQUE GIL MARÍN**



**MARTHA CECILIA LEMA VILLADA**



**RICARDO LEÓN CARVAJAL MARTÍNEZ**